LA CONTRIBUCIÓN DEL DERECHO HUMANO INTERNACIONAL A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL: INTEGRAR PARA MEJOR CUIDAR LA TIERRA Y LA HUMANIDAD

EDSON FERREIRA DE CARVALHO*

INTRODUCCIÓN.....	142
I. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: DIFERENTES PERSPECTIVAS Y DISTINTAS PERCEPCIONES.....	145
A. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO ELEMENTO ESENCIAL AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS	146
B. LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FACTOR ESENCIAL A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	149
C. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UNA PERSPECTIVA DE INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA: EL DERECHO HUMANO AL AMBIENTE.....	151
II. ¿QUIÉN POSEE COMPETENCIA PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL?.....	156
III. LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	166
A. LA ACTUACIÓN DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN CASO ENVOLVIENDO POLUCIÓN ATMOSFÉRICA	168

* Licenciado en Derecho con Maestría en Relaciones Internacionales por el Centro de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil). Recibió el premio internacional Gilles Boulet, de la *Inter-American Organization for Higher Education (OUI)*, con sede en Canadá. El autor fue Director-Presidente de la Fundación Instituto de la Biodiversidad y Manejo de Ecosistemas de la Amazonia Occidental. Actualmente es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

B. LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL PUEBLO OGONI ...	173
C. LA ACTUACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PUEBLO INDÍGENA AWAS TINGNI MAYAGNA	175
CONCLUSIÓN	179

El presente artículo tiene por objetivo elucidar como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede contribuir con el Derecho Ambiental Internacional en la colosal tarea de protección ambiental. El artículo aborda la protección ambiental y la promoción de los derechos humanos bajo diferentes perspectivas. Asimismo, hace un recorrido sobre la competencia para promover la protección ambiental en el ámbito internacional y expone la actuación de la Comisión Africana y de las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos en casos relacionados con la degradación ambiental.

INTRODUCCIÓN

El ecosistema terrestre viene sufriendo gravísimas lesiones, cuyas consecuencias tienen potencial para afectar a toda la humanidad. Los más de seis mil millones de seres humanos que lo habitan, ejercen gigantesca presión sobre los recursos naturales y provocan polución y degradación de los océanos y ríos, de los suelos y de la atmósfera, poniendo en riesgo la capacidad de producción de los ecosistemas y la supervivencia de las especies.¹

En los últimos años, la degradación ambiental pasó a constituir no sólo una catástrofe ecológica, sino principalmente humanitaria, amenazando el disfrute de los derechos más esenciales de la persona

1. Ver generalmente, *Intergovernmental Panel on Climate Change 2007, Summary for Policymakers [Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático 2007. Resumen para Políticos]* en CLIMATE CHANGE 2007: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS [CAMBIO CLIMÁTICO 2007: EL FUNDAMENTO DE LA CIENCIA FÍSICA] 2-12 (Susan Solomon, et al. eds., 2007), disponible en <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf> [en adelante CAMBIO CLIMÁTICO 2007] (resumiendo un estudio que demuestra en parte los efectos negativos que las emisiones de carbón producidas por seres humanos tienen en el medio ambiente).

humana. Datos ampliamente difundidos muestran que un mil millón de personas, a cada día, bebe agua contaminada y alrededor de tres millones de niños mueren cada año por el consumo de agua insalubre.² Casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a la infraestructura de saneamiento básico, lo que equivale a decir que una gran cantidad de cloacas es arrojada directamente en el ambiente.³ Aproximadamente un mil millón y 300 millones de personas respiran aire de calidad fuera de los estándares internacionales y cerca de 700 mil personas mueren por año, debido a exposición a la polución atmosférica.⁴ El adelgazamiento de la capa de ozono es responsable, anualmente, por 300 a 700 mil casos de cáncer y 1,7 millones de ocurrencias de cataratas.⁵

En lo que concierne al calentamiento global, el Panel Intergubernamental sobre cambios Climáticos (IPCC), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un informe alarmante sobre cambios climáticos.⁶ Los especialistas del IPCC afirman, con 90% de probabilidad de acierto, que el calentamiento del planeta se debe a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) resultantes de las actividades humanas.⁷ De acuerdo con el estudio del IPCC,⁸ en los últimos 100 años el aumento de la temperatura fue de 1 °C. Si mantenida la velocidad actual, se estima que la temperatura media de la Tierra subirá entre 2 y 4,5 °C hasta 2050, lo que provocará elevación del nivel de los océanos que puede variar entre 18 y 59 cm.⁹ Esas alteraciones resultarán en cambios profundos en las condiciones climáticas de la Tierra, previéndose incremento en la intensidad de las ondas de calor, inundaciones más frecuentes,

2. JOSÉ ADÉRCIO SAPAIO, ET AL, PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL: NA DIMENSÃO INTERNACIONAL E COMPARADA [PRINCÍPIOS DE LA LEY AMBIENTAL: EN LA DIMENSION INTERNACIONAL Y COMPARADA] 6 (Belo Horizonte: Del Rey ed., 2003).

3. *Id.*

4. *Id.*

5. *Id.*

6. *Ver generalmente* CAMBIO CLIMÁTICO 2007, *supra* nota 1.

7. *Ver id.* en 2-3 (explicando que según el estudio hay una alta probabilidad de que las actividades de los seres humanos desde 1750 hayan aumentado la temperatura global).

8. *Ver id.* en 11 (exponiendo por medio de gráficas, el aumento en la temperatura global durante el siglo pasado).

9. *Ver id.* en 12-13 (estimando cuanto subirían los océanos hipotéticamente en la mejor y en la peor situación).

ciclones tropicales, tifones y huracanes más intensos, disminución de la disponibilidad de agua potable y elevación del nivel del mar, tal como la desaparición de algunas islas y pérdida de suelos fértiles.¹⁰

Los cambios climáticos son responsables por la expulsión de millares de personas de sus habitaciones, haciendo con que el número de refugiados climáticos sea superior a los de guerras.¹¹ Investigación conducida por el académico Norman Myers, de la Universidad de Oxford, Reino Unido, pronostica que habrá 200 millones de refugiados en 2050.¹² Evaluaciones recientes demuestran que existen en el mundo alrededor de "22 millones de refugiados y 30 millones de desplazados en los territorios de los Estados."¹³ La crisis ambiental presenta gran potencial para elevar los desplazamientos poblacionales a cifras catastróficas, "como consecuencia de una mezcla de extenuación de recursos naturales, de la degradación irreversible de los ecosistemas y del crecimiento descontrolado de la población."¹⁴

Se deduce de las observaciones anteriores que la promoción de los derechos humanos, la elevación de la calidad de vida y la atención de las necesidades y aspiraciones humanas sólo podrán ser aseguradas en ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, delante de la trascendental importancia, en los días actuales, de la protección ambiental para la humanidad, este estudio tiene por objetivo elucidar como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede contribuir con el Derecho Ambiental Internacional en la protección ambiental.

10. Ver *id.* en 15 (hablando de la probabilidad de catástrofes debido a cambios climáticos extremos); Richard Black, *Climate Water Threat to Millions [El Clima del Agua Amenaza a Millones]*, BBC NEWS, 20 de octubre de 2006, disponible en <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6068348.stm>.

11. Ver Susana Borrás Pentinat, *Refugiados Ambientales: El Nuevo Desafío del Derecho Internacional del Medio Ambiente*, 19 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE REVISTA DE DERECHO 85, 86 (2006) (dando como ejemplo, desastres naturales recientes en países como Mozambique, Hungría, y Pakistán).

12. Black, *supra* nota 10.

13. Pentinat, *supra* nota 11, en 86.

14. *Id.* en 88.

I. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: DIFERENTES PERSPECTIVAS Y DISTINTAS PERCEPCIONES

Aunque haya recibido mayor destaque en los medios de comunicación de masa en los últimos años, en razón de la amplia difusión de los Informes del IPCC por la media, la crisis ambiental no es nueva. En 1972, ya se mostraba alarmante y para enfrentarla, la Asamblea General de las Naciones Unidas promovió una conferencia mundial con el objetivo de delinear una "visión global y establecer principios comunes de acción, con vistas a inspirar y orientar la humanidad en la búsqueda de la protección, preservación, recuperación y mejoría del ambiente."¹⁵

La Declaración de Estocolmo,¹⁶ que resultó de la Conferencia sobre el Ambiente Humano de 1972, fue el primer documento global a establecer la intrínseca relación entre derechos humanos y medio ambiente al reconocer, en su preámbulo, que "Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida."

A partir de ese documento, otros lo siguieron en el sentido de tornarse imperativo para la humanidad defender y mejorar el medio ambiente, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras. La Declaración de Río, de 1992, cambió el enfoque de la Declaración de Estocolmo al abandonar el lenguaje de derechos humanos y establecer, en el principio 1, que "[L]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza."¹⁷

Desde entonces, la relación entre ambiente y derechos humanos ha vuelto a ser concebida bajo la óptica de la protección ambiental, de la

15. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Preamble [Reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Preámbulo], 11 I.L.M. 1416 (1972) (traducción del autor).

16. *Id.* ¶ 1.

17. Rio Declaration on the Environment and Development [Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo], Principio 1, Doc. O.N.U. A/Conf.151/5/Rev.1 (13 de junio de 1992) [en adelante Declaración de Río] (traducción del autor).

promoción de los derechos humanos y de la integración de las dos concepciones, mediante la consagración del derecho humano al ambiente de cierta calidad. A seguir, la protección ambiental será analizada brevemente, bajo las principales ópticas más destacadas en la literatura internacional.¹⁸

A. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO ELEMENTO ESENCIAL AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Bajo la perspectiva de la Declaración de Estocolmo, la protección de la calidad ambiental constituye prerequisite al disfrute de los derechos humanos. En ese sentido, la protección ambiental representa condición esencial para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos. De acuerdo con esa concepción, las condiciones ambientales determinan la extensión en la cual cierta colectividad humana disfruta de los derechos básicos a la vida, salud, alimentación adecuada, vivienda, al modo tradicional de subsistencia y a la cultura.

El derecho a la vida puede ser considerado un prerequisite para los demás derechos. Por otro lado, la vida requiere condiciones ambientales generales (procesos ecológicos preservados, atmósfera protectora y servicios ambientales) y específicas (abrigo, agua, alimento y aire que atiendan determinados estándares cualitativos y cuantitativos) que permitan desarrollar una existencia digna. Sin esas condiciones, la vida no es posible o es eliminada. El fenómeno de la vida está fuertemente integrado en la existencia de un ambiente ecológicamente equilibrado. Esa relación vital se revela no sólo en la necesidad de agua potable, aire limpio y alimento saludable para cada ser humano, pero en una relación sistémica, evolucionista y ecológica que involucra toda la humanidad. Hay una relación

18. *Ver generalmente*, Dinah Shelton, *Environmental Rights [Derechos del Medio Ambiente]*, en PEOPLE'S RIGHTS [DERECHOS DE LA GENTE] 185 (Philip Alston ed., 2001); Dinah Shelton, *Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment [Derechos Humanos, Derechos del Medio Ambiente, y Derecho al Medio Ambiente]*, 28 STAN. L. INT'L L. 103 (1991); Permanent Council of the Organization of American States, *Human Rights and the Environment: Summary of Paper of Professor Dinah Shelton [Derechos Humanos y El Medio Ambiente: Resumen del Papel de la Profesora Dinah Shelton]*, 4 de abril de 2002, OEA/ser.G/CP/CAJP-1896/02, *disponible en* <http://www.oas.org/consejo/CAJP/docs/cp09488e05.doc> (hablando de la relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente).

intrínseca y, por lo tanto, ontológica entre el medio ambiente y la especie humana, pues poseen identidades y raíces comunes.

El derecho a la vida posee varias dimensiones jurídicas, entre ellas la de nacer, de no ser privado de ella arbitrariamente y de supervivencia. El contenido del derecho a la vida, proclamado en el art. 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos¹⁹ (Todo individuo tiene derecho a la vida), presenta dos dimensiones. Una individual, representada por el derecho de personalidad de todo ser humano a no ser privado de su vida (derecho a la vida, propiamente dicho), abrigado en el art. 6.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),²⁰ y otra social, representada por el derecho a un nivel de vida adecuado, que debe ser promovido por el Estado (derecho a vivir dignamente), abrigado en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),²¹ especialmente en el art. 6.²²

El ambiente se encuentra también íntimamente relacionado con el derecho a la salud. Tal derecho está previsto en el art. 25, § 1º, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual dispone que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la habitación, la asistencia médica y los

19. Universal Declaration of Human Rights [Declaración Universal de Derechos Humanos], art. 3, G.A. Res. 217A, en 71, O.N.U. GAOR, 3º Sess., 1º plen. mtg., Doc. O.N.U. A/810 (12 de diciembre de 1948) [en adelante U.D.H.R.].

20. International Covenant on Civil and Political Rights [Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos], art. 6, 19 de diciembre 1966, Doc. O.N.U. A/6316, 999 U.N.T.S. 171.

21. Ver International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales], 16 de diciembre de 1966, 6 I.L.M. 360, 993 U.N.T.S. 3.

22. Ver Antônio Augusto Cançado Trindade, *Human Rights and the Environment*, en HUMAN RIGHTS: NEW DIMENSIONS AND CHALLENGES [Derechos Humanos y El Medio Ambiente], en DERECHOS HUMANOS: NUEVAS DIMENSIONES Y OBSTÁCULOS] 117, 130 (Janusz Symonides ed., 1998) (hablando de la relación entre el derecho a la vida y un nivel de vida adecuado); ver también, Antônio Augusto Cançado Trindade, *Environment and Development: Formulation and Implementation of the Right to Development as a Human Right* [El Medio Ambiente y el Desarrollo: Formulación e Implementación del Derecho al Desarrollo como Derecho Humano], en 3 ASIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW [LIBRO ASIÁTICO ANUAL DE LA LEY INTERNACIONAL] 15 (Ko Swan Sik, et. al. eds., 1993).

servicios sociales necesarios . . . ”²³ En la calidad de derecho individual, su plena realización incluye la protección de la integridad física y mental de la persona (PIDCP, art. 7), la calidad de derecho social, y la adopción por parte de los Estados de un conjunto de medidas que asegure el derecho de toda persona a disfrutar lo más elevado nivel de salud física y mental y la mejora de todos los aspectos de higiene del trabajo y del medio ambiente (PIDESC, art. 12, § 1º y § 2º, b).²⁴

El sistema normativo de derechos humanos no constituye una estructura jurídica rígida. La comprensión de sus normas gana nueva percepción que va ampliándose a la medida que surgen nuevas amenazas que ponen en riesgo la posibilidad de los seres humanos lograr vida plena y digna. En ese sentido, la degradación ambiental constituye una de las principales amenazas al disfrute de los derechos humanos. Los derechos a la vida y a la salud son normas consagradas universalmente como derechos humanos inderogables. El goce de esos derechos abarca la imposición a los Estados del deber de proteger el medio ambiente, sea a través de la abstención de promover acciones que causen degradación ambiental y ponen la vida y la salud de las personas en peligro, o sea en la forma de acción, una vez que los Estados deben buscar, utilizar lo máximo posible de sus recursos para asegurar el acceso al agua potable, al aire limpio, a alimentos saludables, bien como propiciar ambiente sin polución y seguridad alimentaria y ecológica a largo plazo.²⁵

La Propuesta de Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente²⁶ establece, en el principio 5º, que “Todos tienen el derecho de vivir libres de polución, degradación ambiental y de actividades que afecten adversamente el ambiente,

23. U.D.H.R. *supra* nota 19, art. 25(1).

24. *Ver* Trindade, *Derechos Humanos y El Medio Ambiente*, *supra* nota 22, en 133 (explicando cómo el derecho individual en este caso engloba una obligación negativa y cómo el derecho social constituye una obligación positiva por parte del estado).

25. Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, *Una Nueva Estrategia de Desarrollo para las Américas Desde los Derechos Humanos y el Medio Ambiente* (marzo de 2002), *disponible en* <http://www.cedha.org.ar/docs/doc79-spa.htm>.

26. *Draft Principles On Human Rights and the Environment [Escrito de Principios sobre Derechos Humanos y El Medio Ambiente]*, Doc. O.N.U. E/CN.4/Sub.2/1994/9 (16 de mayo de 1994) *disponible en* <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/1994-dec.htm>.

amenacen a la vida, a la salud, a la subsistencia, el bienestar y el desarrollo sostenible dentro, a través o fuera de las fronteras nacionales.”²⁷

En esa visión integradora, la protección ambiental representa condición esencial al disfrute de los derechos humanos. Ese abordaje ilustra como los derechos a la vida y a la salud y los otros derechos humanos están relacionados con el ambiente seguro y saludable. Tal comprensión debe constituir la *ratio legis* tanto de la legislación de protección y promoción de los derechos humanos, como de la legislación ambiental destinada a proteger el ambiente y la perpetuación de la especie humana.

B. LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FACTOR ESENCIAL A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Bajo la a óptica del Derecho Ambiental Internacional, la relación entre promoción de los derechos humanos y protección ambiental es instrumental. En esa perspectiva, el ejercicio de ciertos derechos humanos es considerado herramienta esencial para lograrse la protección ambiental. En ella la relación entre derechos humanos y protección ambiental es formulada en términos procesales.²⁸ Esa visión es encontrada en el principio 10 de la Declaración de Río, según la cual “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que le corresponda.”²⁹

En la visión instrumental, el amplio ejercicio de los derechos humanos a la información, a la participación en los procesos de decisión y de acceso a los procedimientos judiciales y administrativos, constituye factor esencial para proteger el ambiente.³⁰ Así, la protección ambiental sería lograda con mayor efectividad, disponiendo para cada ciudadano el acceso a las

27. *Id.* en principio 5.

28. *Ver* DAVID HUNTER, JAMES SALZMAN Y DURWOOD ZAEKE, INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY [LEY Y POLÍTICA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE] 1312-17 (2d ed. 2002) (explicando como los derechos procesales, incluyendo el derecho a no ser discriminado y el derecho a un remedio legal, pueden ayudar a proteger el medio ambiente).

29. Declaración de Río, *supra* nota 17, en principio 10.

30. *Ver* HUNTER ET. AL, *supra* nota 28, en 1312-17 (detallando como individuos pueden utilizar estos derechos procesales con el fin de ampliar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano).

informaciones ambientales detenidas por las autoridades públicas, incluso las referentes a materiales y actividades peligrosas existentes en sus comunidades, además de crear foros y oportunidades de participación en los procesos de toma de decisiones.³¹

Por lo tanto, a los Estados les toca la responsabilidad de facilitar y estimular la concienciación y la participación de la población en la defensa del medio ambiente, poniendo las informaciones a disposición de todos. Para viabilizar dicha estrategia, los Estados deben facilitar el acceso efectivo a los mecanismos judiciales y administrativos. De esa forma, esos derechos humanos deben ser fortalecidos de manera a perfeccionar los procesos decisorios y promover la participación ciudadana en la protección ambiental.³²

La visión tradicional que concibe el Derecho Internacional sólo como la ley de la comunidad internacional de los Estados y que sostenía ser el Estado el único sujeto de derecho internacional viene siendo mitigada progresivamente.³³ En la esfera de los derechos humanos, se afirma la idea de que el individuo es no apenas objeto, pero también sujeto de derecho internacional. A partir de esa perspectiva, comienza a consolidarse la capacidad procesal internacional de los individuos, tal como la concepción de que los derechos humanos no más se limitan a la exclusiva jurisdicción doméstica, pero constituyen interés internacional.³⁴ Entonces, de la misma forma que se admite intervenciones de la Comunidad

31. *Ver id.* en 1316 (sosteniendo que el derecho a la participación en los procesos de decisión es inútil si la gente no está informada); Trindade, *Derechos Humanos y El Medio Ambiente*, *supra* nota 22, en 136 (explicando que estos derechos son un corolario de un derecho procesal más amplio).

32. *Ver, por ejemplo*, *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* [*Convención sobre el Acceso a la Información, Participación Pública en la toma de Decisiones, y Acceso a la Justicia en Conceptos sobre el Medio Ambiente*], Doc. O.N.U. ECE/CEP/43 (25 de junio de 1998) (promoviendo los derechos de procedimiento en el ámbito del Derecho Ambiental).

33. *Ver* Prudencé E. Taylor, *From Environmental to Ecological Human Rights: A New Dynamic in International Law? [Desde los Derechos Humanos Ecológicos a los del Medio Ambiente: Una Nueva Dinámica de Derecho Internacional?]*, 10 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 309, 316 (1998) (describiendo que antes de la segunda guerra mundial, el derecho internacional fue considerado un sistema que sólo podía regular la conducta de los estados).

34. *Id.* en 316; *ver* Trindade, *Derechos Humanos y El Medio Ambiente*, *supra* nota 22, en 118 (hablando de la erosión del concepto de la jurisdicción doméstica en el ámbito de los derechos humanos).

Internacional en el plan nacional, en pro de la protección de los derechos humanos, es deseable que lo mismo ocurra con la protección ambiental.³⁵

Si el Estado tiene la obligación de proteger el ambiente, sus ciudadanos tienen el derecho de exigirla. La creación de procedimientos apropiados de presentación de peticiones individuales a las organizaciones de derechos humanos u otra organización creada para ese fin puede ser muy útil. Sin esa vía, los individuos quedarán dependientes de la voluntad de su propio Estado para tomar las medidas necesarias a la protección del ambiente.³⁶

En el presente enfoque, el derecho al ambiente de cierta calidad es identificado con el derecho a su conservación o protección, cuyo contenido se concretiza mediante el ejercicio de los derechos a la información ambiental, de participación en los procesos de toma de decisión involucrando cuestiones ambientales, y de hacer actuar la tutela jurisdiccional y administrativa en la protección del medio ambiente.³⁷

C. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UNA PERSPECTIVA DE INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA: EL DERECHO HUMANO AL AMBIENTE

El tercer abordaje sobre la relación entre derechos humanos y medio ambiente es más reciente y concebida en la perspectiva de la positividad de un derecho humano sustantivo específico, con el cual todos los Estados deben comprometerse a garantizar el derecho al ambiente de cierta calidad, adjetivado con los términos saludable,

35. Ver Trindade, *Derechos Humanos y El Medio Ambiente*, supra nota 22, en 118 (explicando que la conservación del medio ambiente, así como la protección de los derechos humanos, es responsabilidad de la comunidad internacional).

36. Ver Taylor, supra nota 33, en 359 (llamando la atención al hecho de que los estados normalmente no toman medidas en contra de otros estados por su falta de respeto al medio ambiente) (traducción del autor).

37. Alexandre Kiss, *Après le Cinquantième Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme. Et le Droit a L'Environnement? [Sobre el Cincuentésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Derecho al Medio Ambiente?]*, 1999 REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT [REVISIÓN AMBIENTAL JUDICIAL] 5, 6 (1999) (mencionando que la gente tiene el derecho de saber los detalles de proyectos que afectan al medio ambiente que la rodea).

seguro, limpio o ecológicamente equilibrado.³⁸ Bajo esa óptica, el eslabón entre protección ambiental y promoción de los derechos humanos viene siendo concebido en una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, según se ve en la formulación del derecho sustantivo al ambiente, positivado en algunos instrumentos regionales y constituciones nacionales.³⁹

En el ámbito del Derecho Internacional, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, fue el primer instrumento a consagrar el derecho sustantivo al ambiente al establecer, en el art. 24, que “[t]odos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo.”⁴⁰

En seguida, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), de 1988, reconoció expresamente el derecho al ambiente saludable, en el artículo 11, al establecer que “[t]oda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” y que “[l]os Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”⁴¹

El Sistema Europeo de Derechos Humanos no incluye el derecho al ambiente de cierta calidad en el catálogo de derechos protegidos por la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.⁴² En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos no hay ningún tratado de derechos humanos que consagra el derecho al ambiente ecológicamente

38. Ver Shelton, *Derechos del Medio Ambiente*, supra nota 18, en 2 (hablando de la visión de un derecho humano a un medio ambiente seguro y saludable como un derecho humano independiente de los otros).

39. *Id.* en 2-3 (dando algunos ejemplos de instrumentos regionales y explicando el contenido de algunas constituciones).

40. African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights [Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de Personas], art. 41, 27 de junio de 1981, 21 I.L.M. 58 (traducción del autor).

41. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (Protocolo de San Salvador) OEA No. 69, 18º Sess. San Salvador, 17 de noviembre de 1988, art. 11, disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html>.

42. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales], 4 de noviembre de 1950, 213 U.N.T.S. 222 (traducción del autor).

equilibrado.⁴³ La Propuesta de Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente⁴⁴ formuló el derecho humano al ambiente al disponer expresamente, en el principio 2, que “[t]odos tienen el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho y otros derechos humanos, incluyendo derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales son universales, interdependientes e indivisibles.”

Como resultado de los avances de los estudios y de la comprensión sobre la relación entre protección ambiental y disfrute de los derechos humanos, más de 100 Constituciones contienen en sus textos normas que imponen a los Estados y a la colectividad el deber de proteger y preservar el ambiente de daños ambientales.⁴⁵ Cerca de la mitad de ellas consagran el derecho fundamental al ambiente de cierta característica.⁴⁶

Una de las principales objeciones al derecho humano al ambiente saludable es la dificultad de delimitar su contenido.⁴⁷ Según James Nickel (1993), ese obstáculo puede ser superado en caso de que sea establecida la limitación adecuada al derecho al ambiente, de modo a permitir que los foros de derechos humanos puedan actuar de manera que complementen a los órganos de derecho ambiental.⁴⁸ Los

43. Melissa Thorne, *Establishing Environment as a Human Right [Estableciendo al Medio Ambiente como un Derecho Humano]*, 19 DENV. J. INT'L L. & POL'Y 301, 331 (1990) (argumentando que para tener la habilidad de hacer cumplir el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, es necesario que se codifiquen las garantías correspondientes).

44. Draft Principles on Human Rights and the Environment [Escrito de Principios sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente], *supra* nota 26, en principio 2.

45. Shelton, *Derechos Humanos y El Medio Ambiente*, *supra* nota 18, en 3.

46. Luis E. Rodríguez-Rivera, *Is the Human Right to the Environment Recognized Under International Law? It Depends on the Source [Se Reconoce El Medio Ambiente como Derecho Humano bajo la Ley Internacional? Depende en los Recursos]*, 12 COLO. J. INT'L ENVTL. L. & POL'Y 1, 27 (2001) (haciendo referencia a un reportaje que destaca que más de sesenta constituciones nacionales incluyen alguna disposición relacionada con el medio ambiente); *ver también* C.F. art. 45 (Brasil); CONST. ARG. art. 41; CONST. PORTUGAL. art. 66.

47. *Ver, por ejemplo*, SANTIAGO FELGUERAS, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 57 (1996) (señalando que un contenido preciso frecuentemente presenta un problema para los derechos nuevos).

48. James W. Nickel, *The Human Right to a Safe Environment: Philosophical Perspectives on its Scope and Jurisdiction [El Derecho Humano a un Ambiente Seguro: Perspectivas Filosóficas sobre los Límites de este Derecho y la Jurisdicción]*, 18 YALE J. INT'L L. 281, 284 (1993) (rechazando la idea de una

órganos de derechos humanos no solucionarían cuestiones técnicas que requieren programación y negociaciones de prolongado plazo, pero podrían demandar de los Estados adopción de providencias sensatas para impedir o detenerse la violación del derecho humano al ambiente ecológicamente equilibrado. Es decir, si el contenido del derecho humano al medio ambiente fuese juiciosamente delineado, los órganos de derechos humanos no suplantarían o reproducirían las actividades realizadas en la esfera del Derecho Ambiental Internacional, y a lo contrario, las integrarían.⁴⁹

En la propuesta ya mencionada, la relación entre la promoción de los derechos humanos y degradación ambiental, centraliza el foco exclusivamente sobre la salud humana y la seguridad ambiental. Es verdad que dicha formulación normativa del derecho al ambiente seguro tendría mayor probabilidad de aceptación como innegable derecho humano.⁵⁰ Pero, bajo esa concepción, el derecho al ambiente seguro o saludable consistiría solamente aquello que no sería perjudicial a la salud humana, de modo que el contenido de ese derecho se circunscribiría a los peligros originarios de los procesos tecnológicos e industriales y de la eliminación de productos y basura tóxicos.

En términos generales, el derecho al ambiente seguro se referiría a la seguridad en relación a la polución, dado que sus efectos más severos pueden afectar la salud (causar enfermedades agudas y crónicas) y la vida (muertes). Delante de la imposibilidad de la total eliminación de riesgos, sería necesario determinar niveles de seguridad adecuados a la protección de la vida y de la salud humana ante los peligros ambientales más importantes. En esa perspectiva, el derecho al ambiente seguro tendría por objetivo proteger a las personas contra la contaminación y sus consecuencias ofreciéndoles los medios necesarios para prevenir y remediar los efectos dañosos de esa categoría de impacto ambiental.⁵¹

formulación demasiado amplia del derecho a un medio ambiente seguro); ver FELGUERAS, *supra* nota 47, en 71, 83.

49. FELGUERAS, *supra* nota 47, en 72.

50. Nickel, *supra* nota 48, en 284-85 (describiendo las condiciones ambientales que garantizarían el derecho a un medio ambiente seguro). Nickel agrega que, a pesar de que el término adecuado es poco específico, el dicho término útilmente crearía un punto de referencia normativo para los cuerpos ejecutivos, legislativos, y judiciales de todos los países. *Id.*

51. *Id.* en 290 (sosteniendo que el derecho a un medio ambiente seguro debería

En síntesis, la propuesta de Nickel parte de la idea de que el ambiente seguro no estaría libre de contaminación, pero sería aquel en el cual los contaminantes se encuentran en concentraciones inferiores a los susceptibles de constituir riesgo a la salud de las personas y a la calidad de vida de la población. Su presupuesto no es la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El autor de la propuesta no lleva en consideración los efectos cumulativos y de largo plazo—que las emisiones de contaminantes son capaces de provocar el cambio del clima de la Tierra, y que pueden resultar en efectos masivos y catastróficos a la salud, a la vida y al bienestar de la población de todo planeta. En esa formulación restrictiva, las instituciones de derechos humanos sólo actuarían en los casos que la degradación ambiental acarree riesgo inmediato o violación concreta al bienestar humano.

Aunque el derecho humano al ambiente sea de implementación gradual, nada obstaría que en situaciones en las que graves amenazas de degradación ambiental puedan amenazar la salud, la vida y el bienestar de las personas, que el derecho al ambiente saludable venga a ser prontamente ejecutado.⁵² Entonces, sería posible consagrar un régimen mixto de exigencia para el derecho sustantivo al ambiente, adoptando el sistema de inmediata aplicación o ejecución, en algunos casos especificados, y otro sistema de implementación gradual para situaciones necesariamente de largo plazo.⁵³ En situaciones de inminente riesgo a la salud y a la vida, no sería razonable adoptar un sistema de ejecución gradual.⁵⁴

Uno de los principales argumentos favorables a la adopción del derecho autónomo a un ambiente saludable es la elevación del status de la calidad ambiental cuando en colisión con otros objetivos.⁵⁵

ser considerado tan importante como otros derechos humanos porque tal derecho protege a seres humanos de consecuencias severas).

52. *Ver id.* en 285 (sugiriendo que los niveles de riesgo se determinen a través de los procesos regulatorios y legislativos de cada país).

53. *Ver id.*

54. *Id.* en 285 n. 12 (citando a Joseph L. Sax, *The Search for Environmental Rights [La Búsqueda de los Derechos Ambientales]*, 6 J. LAND USE & ENVTL. L. 93 (1990)); JAMES W. NICKEL, MAKING SENSE OF HUMAN RIGHTS [ENTENDIENDO A LOS DERECHOS HUMANOS] 282 (1987).

55. *Ver* Günther Handl, *Human Rights and Protection of the Environment [Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente]*, en ECONOMIC, SOCIAL

Mientras tanto, aunque sea reconocido expresamente en los Sistemas Regionales Africano y Americano de Derechos Humanos, el derecho humano al ambiente aún necesita de mayor elucidación con respecto a su naturaleza jurídica, definición, contenido, objeto, foro y mecanismos de implementación en el ámbito internacional.⁵⁶

II. ¿QUIÉN POSEE COMPETENCIA PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL?

Dicen que lo más importante es saber formular la pregunta correcta. Al abrir esta sección la primera cuestión que viene a la mente es si el Derecho Internacional de los Derechos Humanos posee competencia para proteger el ambiente. Hay que reconocer, que esa pregunta es crucial, pues alcanza la esencia de la cuestión.

Una de las deficiencias que más preocupan a los defensores del ambiente es la inexistencia de instituciones con poder de formular políticas ambientales amplias y complejas y de foro competente para juzgar conflictos ambientales e imponer decisiones.⁵⁷ En ese contexto es oportuno indagar si las instituciones de derechos humanos son foros apropiados para solucionar las amplias y complejas cuestiones referentes a la protección ambiental.

Hay que admitir que los modelos organizacionales y jurídicos adoptados actualmente reflejan la inadecuación de las instituciones

AND CULTURAL RIGHTS [*DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES*] 303, 304-05 (Asbjørn Eide, et. Al. ed., 2d ed. 2001) (describiendo además la preocupación de algunos comentaristas en cuanto al poco beneficio a la protección ambiental y a los altos costos de procedimiento que traería el derecho autónomo a un medio ambiente saludable); Günther Handl *Human Rights and Protection of the Environment: a Mildly "Revisionist" View* [*Perspectiva Revisionista del Medio Ambiente*], en HUMAN RIGHTS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT [*DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE*] 117, 119 (Antonio Cançado Trindade ed., 1992) (criticando la propuesta de una unión entre los derechos humanos y la ley del medio ambiente como una posición maximalista que tiene poca probabilidad de convertirse en realidad a corto plazo).

56. Handl, *Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente*, supra nota 55, en 308-09 (investigando si existe un derecho humano relacionado al medio ambiente en la ley internacional contemporánea).

57. MERCEDES FRANCO DEL POZO, *EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO* 59-73 (2000) (estudiando los obstáculos posibles que impiden el reconocimiento del derecho al medio ambiente, incluyendo la soberanía estatal, el "soft law," y la falta de justiciabilidad).

de derechos humanos y de derecho ambiental, frente a su limitada competencia para la tarea de promover y supervisar la protección ambiental en nivel global.⁵⁸ Analizándose la Tabla 1, sin entrar en detalles al respecto, se nota fácilmente que es necesaria una profunda reforma en las instituciones y en los mecanismos institucionales con vistas a hacer un abordaje más holístico de las cuestiones ambientales.

El sistema normativo internacional que administra el comercio, los derechos humanos y el ambiente, constituye una colcha de retazo compuesta por diferentes regímenes jurídicos que se desarrollaron separadamente. La probabilidad de haber conflictos entre esos regímenes es elevada, pudiéndose observar incompatibilidades entre normas de liberalización comercial, de protección ambiental y de promoción de los derechos humanos, formuladas por diferentes instituciones.⁵⁹

58. *Id.*

59. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS, REPORTE DE DESARROLLO HUMANO 9 (2000) (proponiendo un modelo de "justicia global" como necesario para la defensa de los derechos humanos en un mundo integrado).

TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL

<i>Elemento caracterizador.</i>	<i>Derecho Internacional de los Derechos Humanos</i>	<i>Derecho Ambiental Internacional</i>
Sistemas de Protección	1. Sistema Universal 2. Sistemas regionales: Europeo, Africano y Americano	Inexiste
Instrumentos Básicos	1. Sistema Universal: Declaración Universal de los Derechos Humanos (status de derecho internacional consuetudinario y expresión de las normas y estándares de derechos humanos), PIDCP y PIDESC 2. Sistemas regionales: Carta Africana y Convenciones Europea y Americana de Derechos Humanos	Declaraciones de Estocolmo y de Río y Agenda 21 (no son vinculantes, pero expresan normas y estándares ambientales aceptados internacionalmente)
Aplicabilidad	Tratados aplicables sólo a los signatarios (v.g. Convención para Prevenir la Tortura)	Acuerdos aplicables sólo a los signatarios que los ratificaron (v.g. Protocolo de Kyoto)
Principios Fundamentales	1. Universalidad 2. Indivisibilidad 3. Imprescriptibilidad 4. Interdependencia 5. No-retroceso	1. Precaución 2. Contaminante-pagador 3. Responsabilidad común, pero diferenciada 4. Desarrollo sostenible (Equidad intergeneracional)
Sujetos	Centrado en los Estados e individuos	Centrado en los Estados, pueblos, individuos y comunidades
Vinculación Jurídica	Jurídicamente vinculante cuando incorporado al derecho nacional	Mixto entre jurídicamente vinculante (v.g. Protocolo de Montreal) y no vinculante (Agenda 21)
Métodos de Control	1. Sistema Universal: basados en la Carta de la ONU y en comités de tratados 2. Sistemas Regionales: métodos jurisdiccionales y de supervisión	Débil o inexistentes (v.g. Prohibición de la comercialización de especies amenazadas de extinción)
Órganos de Resolución de Conflictos	1. Sistema Universal: Comités de tratados y Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2. Sistemas regionales: Comisiones y Cortes de Derechos Humanos	Inexisten [El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) y la Comisión de la ONU para el Desarrollo Sostenible (CSD) son responsables por la coordinación de medidas de protección ambiental y políticas de desarrollo sostenible].
Mecanismo de Petición Individual	Existe	Inexiste

Para entender el papel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la protección ambiental, es necesario un breve estudio comparativo con el Derecho Ambiental Internacional. El objeto, los objetivos y las dimensiones del Derecho Ambiental Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son presentados en la Tabla 2. Se observa que el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos tiene su foco en la defensa y promoción de la dignidad humana y no específicamente en la protección ambiental. Los derechos humanos fueron históricos y sistemáticamente creados para proteger los ciudadanos contra la actuación de los agentes estatales.⁶⁰ No existe ninguna provisión en los instrumentos de derechos humanos que restrinja o regule la explotación de los recursos naturales o autorice algún órgano a actuar en defensa del ambiente.⁶¹

El objeto del Derecho Ambiental Internacional es el ambiente, un macro bien unitario que abarca todos los ecosistemas de la Tierra. En esa amplia concepción, constituye la rama de la Ciencia Jurídica destinada a efectuar el propio derecho de la humanidad al ambiente ecológicamente equilibrado.⁶²

TABLA 2. OBJETO, OBJETIVOS Y DIMENSIONES DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL Y DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

<i>Elemento caracterizador</i>	<i>Derecho Ambiental Internacional</i>	<i>Derechos Internacional de los Derechos Humanos</i>
1. Objeto	Preservación del equilibrio ecológico (interacciones que soportan el flujo de la naturaleza y los procesos ecológicos) y de la biodiversidad (millares de especies)	Dignidad de una única especie: la humana
2. Objetivos	Asegurar la protección y la conservación ambiental en los niveles local, regional y global	Asegurar la promoción y el respeto de los derechos de los individuos de la especie humana
3. Dimensión Territorial	Desconoce fronteras políticas	Dentro de las fronteras de los Estados
4. Dimensión Temporal	Indefinida: Presentes y futuras generaciones	Definida: personas vivas presentes

Como se observa, el Derecho Ambiental Internacional señala hacia un objetivo totalizador representado por el desarrollo sostenible.⁶³ El valor mayor a ser buscado es la garantía de

60. EDSON FERREIRA DE CARVALHO, *MEIO AMBIENTE & DIREITOS HUMANOS [MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS]* 148-54 (2d ed. 2006) (comparando las características del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos).

61. *Ver id.* en 150-52 (detallando además los argumentos que se utilizan en el debate entre los defensores de los derechos humanos y los ambientalistas).

62. *Ver DEL POZO, supra* nota 57, en 32-47 (narrando los orígenes del derecho humano a un medio ambiente adecuado y su trayectoria hacia una mayor aceptación internacional).

63. CARVALHO, *supra* nota 60, en 152.

condiciones de vida adecuada para las generaciones presentes y futuras.⁶⁴ En esa perspectiva, el objeto del Derecho Ambiental Internacional se concretiza en la prevención y en el combate a todas las formas de degradación, tal como en la mejoría del ambiente vital de los seres humanos.

Aunque existan puntos de confluencia, se observa conflicto temporal relevante entre las dos ciencias.⁶⁵ La preocupación esencial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es proteger individuos y grupos vivos actuales, objetivo denominado de equidad intergeneracional. El Derecho Ambiental Internacional objetiva el sostenimiento de la vida globalmente, supliendo las necesidades de la presente generación sin comprometer a las de las futuras generaciones.⁶⁶ No hay duda de que esa amplia concepción de protección de la naturaleza presenta una gran posibilidad de generar conflictos con el ejercicio de derechos individuales fundamentales, como los derechos de propiedad, de reproducción y consumo.⁶⁷

La preocupación con la protección ambiental supera el plan intergeneracional, involucra la participación solidaria de todos y sobrepasa, en su alcance, el derecho nacional de cada Estado soberano para envolver toda la humanidad.⁶⁸ En la esfera planetaria, el mantenimiento del equilibrio ecológico del conjunto de los ecosistemas terrestres asegura la preservación y la protección del medio ambiente para la humanidad.⁶⁹ Sin duda, esa relación robustece la necesidad de integrar los objetivos del Derecho Ambiental Internacional y de los Derechos Ambientales Nacionales con aquellos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el intento de satisfacer temporalmente los intereses de corto plazo de

64. *Id.*

65. *Ver id.*

66. *Ver* ALEXANDER KISS & DINAH SHELTON, INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW [LA LEY AMBIENTAL INTERNACIONAL] (2d ed. 2000) (contrastando las características temporales de los derechos humanos y el derecho ambiental).

67. Handl, *supra* nota 55, en 304 (recalcando que incluso los defensores más firmes del derecho humano al medio ambiente admiten que existen tensiones entre los objetivos de la protección al medio ambiente y de los derechos humanos).

68. *Ver* Shelton, *Derechos al Medio Ambiente supra* nota 18, en 174.

69. *Ver, por ejemplo,* Kiss & Shelton, *supra*, nota 66, en 15 (presentando las bases teóricas del antropocentrismo).

la generación presente con aquellos de largo plazo de las futuras generaciones.⁷⁰

La propuesta más destacada para integrar los objetivos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Ambiental Internacional es la creación del derecho humano autónomo al ambiente saludable o ecológicamente equilibrado.⁷¹ Sin embargo una de las principales críticas que se hace a ese derecho es la imposibilidad de definir su contenido.

La cuestión esencial es establecer su propósito, es decir, saber lo que puede ser reivindicado apropiadamente contra aquel que tiene la obligación de satisfacerla. Conociéndose el propósito del derecho humano al ambiente se puede determinar con precisión las decisiones a ser buscadas; pero, para lograr ese conocimiento será necesario contestar a las siguientes cuestiones:⁷² ¿Es la protección del ambiente humano su objetivo directo e inmediato?; ¿Es el objetivo del derecho al ambiente proteger el ambiente de la Tierra para toda la humanidad?; ¿Si la protección de la vida, de la salud y del patrón de vida humano son los objetivos del derecho al ambiente, podrá un estándar mínimo de calidad ambiental ser relacionado con la condición humana?; ¿Podrá el derecho al ambiente proteger tanto el bienestar humano como el ambiente, incorporando un nivel mínimo de calidad ambiental abajo del cual habrá amenaza a la vida, a la salud y a la calidad de vida humana?; ¿Podrá el objetivo del derecho al ambiente ser limitado a la protección (prevención y conservación) o deberán ser incluidas la restauración y la mejoría del ambiente?

Las respuestas a esas cuestiones pueden aclarar el papel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la protección ambiental bajo la óptica de la concepción en estudio. Hasta el momento, no está claro como la formulación del derecho humano al

70. Ver, por ejemplo, *id.* en 14-15 (señalando que dichos principios de preservación para las generaciones futuras figuran también en declaraciones como la de Estocolmo).

71. Ver NICKEL, *supra* nota 48 (mencionando que “una controversia considerable existe presentemente sobre que tan ampliamente se debería utilizar el lenguaje de derechos al expresar valores y normas ambientales”).

72. J.G. Merrills, *Environmental Protection and Human Rights: Conceptual Aspects [Protección Ambiental y Derechos Humanos: Aspectos Conceptuales]*, en HUMAN RIGHTS APPROACHES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION [PROTECCIÓN AMBIENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA DE DERECHOS HUMANOS] 25 (Alan E. Boyle & Michael R. Anderson eds., 1996).

ambiente podrá interrumpir la degradación ambiental global. Si aprobado el derecho humano sustantivo al ambiente, restaría saber si sería implementado por los órganos de derechos humanos de la ONU o por una Corte Ambiental Internacional dotada de sistema de petición individual y de ONG's. La consagración del derecho humano al ambiente y la creación de una Corte Ambiental Global tendrían el mérito de contribuir para la protección ambiental, pues concedería a los individuos, grupos de individuos, o en ciertas circunstancias pueblos, el interés jurídico suficiente para darles legitimidad para actuar en la protección ambiental, primero en la esfera doméstica e internacional.⁷³

Pienso que el derecho humano al ambiente sin profundos cambios en el cuadro normativo e institucional no producirá ningún efecto en el mundo real, pero resultará contraproducente, pues podrá generar conflictos y distorsionar el enfrentamiento de los problemas ambientales. Además, podrá ocurrir duplicación de esfuerzos, derroches de recursos y superposición de los sistemas de protección ambiental y de los derechos humanos. Las concepciones diferentes con respecto a las causas de los problemas ambientales y de las medidas necesarias para solucionarlos podrán constituir fuente innecesaria de conflictos.⁷⁴

Una de las objeciones más contundentes es que las instituciones de derechos humanos no constituyen foro apropiado para tratar de cuestiones ambientales, pues no poseen conocimiento técnico para solucionarlas.⁷⁵ Los conflictos ambientales son de altísima complejidad, exigiendo la obtención de numerosos datos técnicos por especialistas de las más diversas esferas del conocimiento, que deben ser analizados y ponderados en las decisiones.⁷⁶ Sin acceso a esos

73. Ver generalmente, Amedeo Postiglione, *An International Court of the Environment [Una Corte Internacional del Medio Ambiente]*, en GOVERNING FOR THE ENVIRONMENT: GLOBAL PROBLEMS, ETHICS, AND DEMOCRACY [GOVERNANDO POR EL MEDIO AMBIENTE: PROBLEMAS GLOBALES, ÉTICA Y DEMOCRACIA] (Gleeson Brendan & Nicholas Low eds., 2001).

74. Ver Ileana M. Porras, *Colloquium Proceedings: A Latcrit Sensibility Approaches the International: Reflections on Environmental Rights as Third Generation Solidarity Rights [Procedimientos de Coloquio: Una Sensibilidad Latcrit se Aproxima a la Internacional: Reflexiones sobre los Derechos Ambientales como Derechos de Solidaridad hacia Generaciones Terceras]*, 28 U. MIAMI INTER-AM. L. REV. 413, 416-17, 423-24 (1996).

75. *Id.*

76. Merrills, *supra* nota 72.

datos, el cuerpo técnico de los órganos dedicados a los derechos humanos no tendría como tomar medidas congruentes, razón por la cual existe el temor de que decisiones sobre cuestiones ambientales, tomadas por instituciones de derechos humanos, no consideren debidamente la amplia gama de aspectos técnicos involucrados.⁷⁷

El enfrentamiento de la crisis ambiental pasa por la colosal tarea de gestar una política ambiental globalizada, en la cual sea asegurado el ambiente ecológicamente equilibrado, previéndose instituciones capaces de protegerlo en beneficio de la humanidad presente y futura.⁷⁸ Dependiendo de la cuestión ambiental, las decisiones requieren consulta amplia y negociaciones con las partes afectadas. Normalmente, producción y polución/degradación establecen complejas relaciones sociales, económicas y ecológicas que necesitan ser analizadas muy detenidamente.

Obstáculo relevante a la actuación de las instituciones de derechos humanos para procesar casos ambientales es el hecho de no estar dotadas de competencia para tratar de cuestiones ambientales. Hay fuertes indicios de que eso no volverá a ocurrir tan pronto, principalmente por la falta de adhesión de los principales países contaminantes, como Estados Unidos y Japón, que se abstuvieron de votar la Resolución 41⁷⁹ de la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Los representantes de esas naciones alegaron que el foro de derechos humanos no es apropiado para solucionar cuestiones ambientales.

77. Alan E. Boyle, *The Role of International Human Rights Law in the Protection of the Environment* [El Papel de la Ley Internacional de los Derechos Humanos en la Protección del Ambiente], en HUMAN RIGHTS APPROACHES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION [PLANTEAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS] 43 (Alan E. Boyle y Michael R. Anderson eds., 1996).

78. *Id.*

79. Ver Commission on Human Rights [Comisión sobre Derechos Humanos], Human Rights and Scientific and Technological Developments [Derechos Humanos y Desarrollos Científicos y Tecnológicos], 46º Sess., 5 de marzo de 1990, E/CN.4/1990/L.63/Rev.1 (comentando que en la votación de la Resolución 41 del 6 marzo de 1990, la ex-Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas autorizó la ex-Subcomisión sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías a estudiar la relación entre problemas ambientales y la promoción de los derechos humanos); ver también FELGUERAS, *supra* nota 47 (analizando "algunos de los problemas que la crisis ambiental plantea al derecho de los derechos humanos y . . . sugerir los criterios básicos que deberían ser tomados en cuenta al momento de proponer o diseñar soluciones").

Según Ileana Porras (1997), los principales problemas ambientales son insusceptibles de ser solucionados en la perspectiva de los derechos humanos.⁸⁰ En su visión, las instituciones de derechos humanos no constituyen el foro apropiado para resolver los problemas ambientales más críticos de la actualidad como: a) la erosión genética o pérdida de biodiversidad en el sistema terrestre, en los océanos, mares, lagos, ríos y la consecuente destrucción del funcionamiento regular de los procesos ecológicos y de los ecosistemas; b) la presión generada sobre el medio ambiente causada por el creciente aumento de la demanda por agua potable, suelo cultivable y energía, resultante del aumento poblacional, tal como la expansión y fortalecimiento de estilos de vida consumistas; c) la reducción de la capa de ozono y de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables por el cambio del clima de la Tierra; d) la necesidad de desechar, apropiadamente, residuos peligrosos resultantes de usinas nucleares y actividades productivas; e) el control de la captura de ballenas, de la destrucción de los bosques tropicales y de la desertificación.

Las cuestiones ambientales, arriba mencionadas, no se encuentran en la esfera de las atribuciones de las instituciones de derechos humanos. Personalmente, entiendo que es poco probable que ellas reivindicuen la responsabilidad para resolverlas, a no ser que haya una reformulación completa del sistema actual o la creación de otro, completamente nuevo, para enfrentar ese gigantesco reto. La Comisión de Desarrollo Sostenible (ECOSOC) y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) son, y probablemente seguirán siendo por algún tiempo, los coordinadores de las actividades de protección ambiental dentro del Sistema de las Naciones Unidas. Sin mencionar que, en el ámbito de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos ya se encuentra sobrecargado de trabajo y no posee la estructura, los recursos materiales y humanos, así como la competencia técnica requerida para tratar de los problemas ambientales que alcanzan dimensiones regionales y globales.⁸¹

80. Ver Porras, *supra* nota 74 (explicando además que una formulación de derechos humanos ambientales conlleva el peligro de olvidar que todos somos responsables del mal estado del medio ambiente).

81. FELGUERAS, *supra* nota 47, en 68-69 (estudiando las razones principales

La solución de la crisis ambiental global exige cooperación internacional intensa e involucra discusión de aspectos técnicos que no son manejados ante una institución de derechos humanos, una vez que la resolución de esas cuestiones es más política que jurídica. Las causas de esos problemas y las acciones necesarias para solucionarlos ya fueron claramente identificadas en la Declaración del Río al disponer en el principio 7 que "Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Puesto que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas."⁸²

La primera parte del principio 8 del mismo instrumento indica la ruta de acción, principalmente para los países desarrollados, al disponer que "Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles." Y la segunda parte es dirigida a los países en desarrollo en el sentido de "fomentar políticas demográficas apropiadas."⁸³

Siendo así, juzgo poco probable que las instituciones de derechos humanos avoquen para si la solución de problemas ambientales como, por ejemplo, el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, el control de la desertificación y adopción de medidas para evitar la extinción de especies y la erosión genética.⁸⁴

Sin embargo, visto de otra perspectiva, el supuesto derecho al ambiente ecológicamente saludable puede ser derivado implícitamente de otros derechos humanos catalogados. En consecuencia del derecho al ambiente ser inherente a los derechos a la vida, a la salud y al bienestar humano, las instituciones de Derechos Humanos pueden actuar, concreta y subsidiariamente, en

por las que se categorizan a los organismos de derechos humanos como foros inadecuados).

82. *Declaración de Río, supra* nota 17, principio 7 (asignando también responsabilidades adicionales a los países desarrollados por su mayor presión en el medio ambiente y por los "recursos financieros que disponen").

83. *Ver id.* en principio 8.

84. *Ver* FELGUERAS, *supra* nota 47; *ver también* Declaración de Río, *supra* nota 17, principios 7-8.

cuestiones relativas al medio ambiente, a través del desarrollo y de la interpretación progresiva de los derechos ya reconocidos.

No se puede dejar de reconocer que a pesar de la base común de intereses del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Ambiental Internacional, las dos especialidades poseen enfoques distintos, por esa razón la actuación de los órganos de derechos humanos con relación a la protección ambiental deberá ser limitada. Como bien afirmó Dinah Shelton la protección ambiental no puede ser totalmente absorbida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sin desfigurar el sistema de protección y promoción de derechos humanos.⁸⁵

III. LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

No parece lógico pensar que los problemas ambientales deban solucionarse en foros de Derechos Humanos o que asuntos de derechos humanos sean resueltos por los órganos de Derecho Ambiental Internacional. Todavía, el avance en la comprensión de la relación entre medio ambiente y derechos humanos muestra que las dos cuestiones no son estanques y aisladas, teniendo importantes interacciones entre degradación ambiental y derechos humanos en niveles local, nacional, regional y global. En materia de protección ambiental y de la dignidad humana no es sensato trabajar de manera completamente aislada. Nada impide que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueda abordar los problemas ambientales dentro de su óptica, actuando de forma complementaria e interdisciplinaria, apoyando las medidas necesarias a la protección ambiental o hasta mismo formular y perfeccionar limitaciones ecológicas al ejercicio de ciertos derechos humanos.

Conforme afirma Shelton, dada la ausencia general de procedimientos de petición en los tratados ambientales y de instituciones apropiadas para procesarlas, no es posible optar por ingresar con una reclamación en la esfera del Derecho Ambiental

85. Ver Shelton, *Derechos del Medio Ambiente*, supra nota 18, en 186, 190, & 257 (comentando que "las diferencias entre las metas y prioridades se han vuelto evidentes . . . demostrando la dificultad de unir o integrar completamente a una disciplina en la otra").

Internacional, porque ningún foro existe para esa finalidad.⁸⁶ Actualmente, los órganos y las cortes de derechos humanos son las únicas instituciones dotadas de procedimientos internacionales disponibles para desafiar la acción u omisión gubernamental con relación a las cuestiones ambientales que involucran la violación de derechos humanos. En ese sentido, existe cierta presión para sensibilizar las cortes de derechos humanos para que amplíen su competencia para casos que abarquen los dos temas.

Varios ejemplos ilustran la posibilidad de proteger los derechos humanos de los efectos de la degradación ambiental por órganos e instituciones de derechos humanos.⁸⁷ Adelante, serán ejemplificados

86. *Id.* en 214 (observando además que el uso de demandas internacionales se ha convertido en una herramienta aceptable para la protección del medio ambiente).

87. *Ver, por ejemplo*, E.H.P. v. Canada, Communication No. 67/1980, Doc. O.N.U. CCPR/C/OP/1 at 20 (observando que “[e]l Comité observa que la presente comunicación trata de temas serios, como la obligación de los estados a proteger la vida humana”); Yanomami v. Brasil, Case 7615, Inter-Am. C.H.R., Report No. 12/85, OEA/Ser.L./V/II.66, doc. 10 rev. 1 (1985) (encontrando violaciones al derecho a la vida, libertad y seguridad cuando el estado explota desmesuradamente una región tradicionalmente habitada por indígenas); Mayagna Awas Tingni Community v. Nicaragua, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 79 (2001), *disponible en* <http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/AwasTingnicase.html> (decidiendo que acarrear operaciones forestales en una región habitada por indígenas sin reconocer su tradición de propiedad comunal constituye una violación al derecho a la propiedad de los indígenas); African Commission on Human & Peoples’ Rights [Comisión Africana sobre Derechos de los Humanos y de la Gente], Federal Republic of Nigeria in Violation of the African Charter on Human and Peoples’ Rights [República Federal de Nigeria en Violación de la Carta Africana sobre Derechos Humanos], 10-15, O.A.U. Doc. No. ACHPR/COMM/A044/1 (Oct. 27, 2001) [en adelante República Federal de Nigeria] (declarando que la explotación desmesurada de Ogonilandia equivale a una violación del derecho de la población africana a un medio ambiente satisfactorio, a la utilización libre de sus recursos naturales, y a la salud, entre otros); Guerra v. Italia, App. No. 116/1996/735/932 Corte Eur. D.H. 16-17 (1998) (decidiendo que los efectos a los residentes locales, derivados de las plantas químicas, son una violación al derecho a la vida); Ostra v. España, App. No. 16798/90 Corte Eur. D.H. 10, 14 (2001) (contaminación y efectos dañinos de una fábrica de cuero violan el derecho a ser libre de maltrato y el derecho a la vida privada y familiar, y al hogar y correspondencia); Hatton v. Reino Unido, App. No. 36022/97 Corte Eur. D.H. 12, 19 (2001) (ruido de un aeropuerto excesivo infringe en el derecho a la vida privada y familiar, entre otros); Okyay v. Turquía, App. No. 36220/97 Corte Eur. D.H. 9, 12 (2005) (estado viola el derecho de sus ciudadanos al medio ambiente equilibrado al no apagar debidamente tres plantas de energía termal); Taşkin v. Turquía, App. No. 46117/99 Corte Eur. D.H. 15, 21 (2004) (niveles de ruido excesivos causados por explosivos en una mina de oro van en contra del derecho al hogar y la vida privada, entre

algunos casos que involucran violaciones de derechos humanos relacionadas con la degradación ambiental. Por motivo de limitación de espacio, serán abordados sólo un caso resuelto en los sistemas regionales europeo, africano e interamericano de protección de los derechos humanos.

A. LA ACTUACIÓN DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN CASO ENVOLVIENDO POLUCIÓN ATMOSFÉRICA

Aunque el Sistema Europeo no haya consagrado el derecho humano al ambiente, sigue decidiendo diversos casos envolviendo la interferencia de la degradación ambiental, especialmente polución, en el disfrute de los derechos a la vida privada y al hogar, previstos en el art. 8º de la Convención Europea de los Derechos Humanos.⁸⁸ Para ilustrar, mediante un caso concreto, como esa práctica viene consolidándose, a seguir se describirá el caso *Fadeyeva v. Federación Rusa*, mencionando otros casos relacionados.⁸⁹

El caso originó de una reclamación de la Sra. Nadezhda Mikhaylovna Fadeyeva contra la Federación Rusa, el 11 de diciembre de 1999, y se encerró el 9 de junio de 2005.⁹⁰ La

otros); Öneriyildiz v. Turquía, App. No. 48939/99 Corte Eur. D.H. 23, 31 (2002) (falta de precauciones por parte del estado para prevenir una explosión de metano y la muerte de nueve individuos viola el derecho a la protección de la vida por la ley); Gómez v. España, App. No. 4143/02 Corte Eur. D.H. 7-11 (2004) (ruido excesivo proveniente de discotecas licenciadas por el estado y que impide que los residentes duerman infringe el derecho de los residentes al hogar y la vida privada); Fadeyeva v. Rusia, App. No. 55723/00 Corte Eur. D.H. 11, 24 (2005) (el estado violó los derechos al hogar y a la vida privada de los residentes al no cumplir con el plan de reducción de contaminación financiado por el Banco Mundial); ver generalmente Caroline Dommen, *Claiming Environmental Rights: Some Possibilities Offered by the United Nations' Human Rights Mechanisms [Reclamando Derechos Ambientales: Unas Posibilidades Ofrecidas por los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas]*, 11 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 1 (1998) (evaluando la eficacia de los procedimientos relacionados a los derechos humanos por las Naciones Unidas en prevenir el daño ambiental); Inara K. Scott, Nota, *The Inter-American System of Human Rights: An Effective Means of Environmental Protection? [El sistema interamericano de derechos humanos: ¿Medios eficaces de la protección del medio ambiente?]*, 19 VA. ENVTL. L.J. 197 (2000) (proponiendo que el sistema interamericano de derecho ocupe de resolver la degradación ambiental en América Latina).

88. Ver, por ejemplo, *Hatton*, App. No. 36022/97 Corte Eur. D.H. en 19; *Gómez*, App. No. 4143/02 Corte Eur. D.H. en 11.

89. *Fadeyeva*, App. No. 55723/00 Corte Eur. D.H. en 24.

90. *Id.*

Reclamante alegó que la polución originaria de una siderúrgica en las cercanías de su casa violaba el derecho a disfrutar de su hogar y afectaba su salud y bienestar, en frontal desobediencia al art. 8º de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Reclamante vivía en la ciudad de Cherepovets, un importante centro productor de acero, ubicado cerca de 300 Km. a nordeste de Moscú.⁹¹

El art. 8º ha sido invocado en varios casos envolviendo cuestiones ambientales, aunque no se observe violación por vía directa, pues ni toda deterioración ambiental implica su desobediencia.⁹² El derecho a la preservación de la naturaleza no está incluido entre los derechos y libertades garantizados por la Convención, conforme fue establecido en el caso *Kyrtatos v. Grecia*.⁹³ De modo que para cuestionar la violación del art. 8º, la interferencia hay que ser directa y afectar el hogar, la vida familiar o privada del Reclamante.

La Corte estableció que el efecto adverso de la polución ambiental debe alcanzar cierto nivel para que la reclamación sea admitida al abrigo del art. 8º.⁹⁴ La evaluación del nivel considerado intolerante es relativa y depende de las circunstancias del caso, tales como la intensidad y permanencia del incómodo, y sus efectos físicos o mentales. El contexto ambiental general es también llevado en cuenta. No se admiten peticiones basadas en el art. 8º si el incómodo reclamado es insignificante, en comparación al riesgo ambiental inherente a la vida moderna.⁹⁵ Entonces, para ser aceptada con fundamento en el art. 8º, la reclamación relacionada con incómodos ambientales debe demostrar la interferencia en la esfera privada del Reclamante en grado que exceda el nivel de intolerancia.⁹⁶

91. *Id.*

92. *Kyrtatos v. Grecia*, App. No. 41666/98 Corte Eur. D.H. 8 (2003) (indicando además que aún haya ocurrido algún daño al medio ambiente, es necesario establecer un daño a los derechos de la persona).

93. *Id.*

94. *Ver, por ejemplo*, *Ostra v. España*, App. No. 16798/90 Corte Eur. D.H. 12 (2001) (rechazando las objeciones del gobierno, que declaraba que el aplicante no sufrió ningún daño); *Hatton v. Reino Unido*, App. No. 36022/97 Corte Eur. D.H. 16 (2001) (aclarando que el gobierno no hizo un buen papel en equilibrar a los intereses sociales con los del aplicante).

95. *Ver, por ejemplo*, *Hatton v. Reino Unido*, App. No. 36022/97 Corte Eur. D.H. 12, 16 (2001) (describiendo el balance apropiado que debe existir entre los intereses individuales y colectivos, y por ende las molestias mínimas no están bajo la protección del artículo 8).

96. *Id.*

Para la Corte, la responsabilidad del Estado en casos ambientales surge de la falla del Estado en reglar la industria privada, conforme lo decidido en el caso *Hatton v. Reino Unido*.⁹⁷ De esa manera, el caso no ha sido apreciado en términos del deber positivo del Estado en adoptar medidas razonables y apropiadas para asegurar los derechos garantizados por el art. 8° § 1° de la Convención.⁹⁸ En esas circunstancias la primera tarea de la Corte es evaluar si es sensato suponer que el Estado actúe de forma razonable para prevenir o detener la alegada violación de los derechos de la Reclamante.

La siderúrgica, construida por el Estado, liberaba gases, olores y contaminaciones desde su inicio, causando problemas de salud a muchas personas en Cherepovets.⁹⁹ Después de la privatización, el Estado siguió a controlar las actividades de la industria a través de la imposición de normas de operación y supervisión.¹⁰⁰ La empresa fue sometida a varias inspecciones por la Agencia Ambiental Estatal Rusa que aplicó multas administrativas a los propietarios y administradores.¹⁰¹

La Corte observó que la situación ambiental cuestionada no fue resultado de un súbito e inesperado evento, pero, por lo contrario, fue de larga duración y notorio.¹⁰² A la semejanza del caso *López Ostra v. España*,¹⁰³ las autoridades municipales estaban conscientes de la continuidad de los problemas ambientales, tanto es, que sancionaron sus autores con propósito a mejorar la situación. En todos los casos previos en los cuales las cuestiones ambientales fueron suscitadas como transgresoras de los derechos humanos protegidos por la

97. *Ver id.* en 17 (indicando que “el estado falló en establecer un equilibrio apropiado entre el bienestar económico del Reino Unido y del derecho del aplicante al respeto por su hogar y su vida privada y familiar”).

98. *Ver Powell y Rayner v. Reino Unido*, App. No. 45305/99 Corte Eur. D.H. 12 (1990) (declarando que el Reino Unido no ha violado el artículo 8 ni de manera positiva ni negativa); *Guerra v. Italia*, App. No. 116/1996/735/932 Corte Eur. D.H. 15 (1998) (indicando que además de la obligación de los estados a no interferir con la vida privada de los individuos, el artículo 8 también crea obligaciones positivas relacionadas con proteger la vida privada y familiar).

99. *Fadeyeva v. Rusia*, App. No. 55723/00 Corte Eur. D.H. 3 (2005).

100. *Id.*

101. *Id.* en 4 (indicando que SeverStal, la compañía privatizada, financió aproximadamente el traslado de un tercio de los residentes a otro distrito de la ciudad).

102. *Id.*

103. *Id.* ¶ 90.

Convención Europea de Derechos Humanos, la violación fue atribuida a la falla de las autoridades nacionales en cumplir algunos aspectos del régimen legal doméstico. En el caso *López Ostra v. España*, la estación de tratamiento de residuos operaba ilegalmente, sin el necesario permiso.¹⁰⁴ En el caso *Guerra y Otros v. Italia*,¹⁰⁵ la violación fue también fundamentada en violación de leyes domésticas, una vez que los Reclamantes fueron incapaces de obtener información que el Estado era obligado a ceder.

En las recientes décadas la polución se ha tornado asunto de creciente interés público. En consecuencia, los Estados adoptaron varias medidas para reducir los efectos adversos de las actividades industriales.¹⁰⁶ Cuando esas medidas pasaron por el tamiz del art. 1º del Protocolo nº. 1, Complementar a la Convención Europea de Derechos Humanos, la Corte pasó a admitir, en regla, que los Estados poseen amplia margen de apreciación en la esfera de la protección ambiental. Entonces, en 1991, en el caso *Fredin v. Suecia*,¹⁰⁷ la Corte reconoció que, en la sociedad contemporánea, la protección ambiental sigue tornándose cada vez más importante y confirmó que la interferencia en la propiedad privada, en la que fue revocado un permiso de extracción de cascajo del subsuelo de la propiedad con la finalidad de conservación de la naturaleza no fue una medida irrazonable.¹⁰⁸ En el mismo año, en el caso *Pine Valley Development Ltd. y Otros v. Irlanda*,¹⁰⁹ la Corte confirmó ese entendimiento.

La Corte concluyó que a pesar de la amplia margen de apreciación del Estado en materia de protección ambiental, el Estado Ruso ha

104. *Id.* ¶ 8 (señalando que la regulaciones de 1961 requerían un permiso).

105. App. No. 116/1996/735/932 Corte Eur. D.H. 15, ¶ 60 (señalando que los solicitantes esperaron a que el estado les diera información “hasta cuando la producción de fertilizantes paró en el año 1994”).

106. *Ver generalmente* EUROPEAN COMMISSION, COMBATING CLIMATE CHANGE: THE EU LEADS THE WAY [COMISIÓN EUROPEA, COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA UE LIDERA EL CAMINO] 5-6 (2007), *disponible en* <http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/en.pdf> (ilustrando la política de las naciones líderes de la Unión Europea en torno a el cambio climático).

107. App. No. 18928/91 Corte Eur. D.H. en ¶ 11 (1994), *disponible en* http://www.menschenrechte.ac.at/orig/94_2/Fredin.pdf.

108. *Ver id.* en ¶¶ 27-29 (encontrando que la decisión del estado de revocar el permiso del solicitante no fue ni “inapropiada” ni “desproporcionada”).

109. *Pine Valley Dev. Ltd. v. Irlanda*, App. No. 12742-87 Corte Eur. D.H. ¶_58_ (1991).

fallado en establecer una justa ponderación entre los intereses de la comunidad y de la Reclamante en disfrutar el derecho al respeto a hogar y a su vida privada, habiendo ocurrido, por lo tanto, violación del art. 8º de la Convención.¹¹⁰ La Reclamante requirió una indemnización en el valor de 10.000 euros por daños morales y una nueva vivienda, equiparable a su flat, fuera de la zona de seguridad o compensación en el valor de 30.000 euros, correspondiente a su valor.¹¹¹ La Corte determinó que el Estado Ruso pagase a la Reclamante 6.000 euros a título de daños morales y costas en el total de 12.040 euros.¹¹² Con respecto a la indemnización por daños materiales o adquisición de una nueva casa, la Corte entendió que la Reclamante no ha comprobado ninguna pérdida material, porque vivía en un flat en la condición de inquilina y no de propietaria.¹¹³

Comprobada la violación del art. 8º en el presente caso, la Corte estableció, en concordancia con el art. 41 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la obligación del Gobierno en tomar las medidas apropiadas para resolver la situación individual de la Reclamante.¹¹⁴ Mientras tanto, para ser más completa, la decisión debería tener sus efectos ampliados en el sentido de recuperar la región contaminada y reasentar las demás personas perjudicadas en un sitio ecológicamente seguro.

Evidentemente que, en el presente caso, la decisión es muy limitada en materia de protección del medio ambiente y de la colectividad, teniendo en cuenta que hubo sólo la reparación patrimonial del daño causado a una víctima, permaneciendo las demás desamparadas.

En el ejemplo estudiado no hubo condena con el propósito de reparar el daño ambiental. Aquí reside una de las diferencias principales del abordaje de la degradación ambiental por órganos de derechos humanos. En la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la reparación del daño bajo la forma de compensación financiera debe ser pagada a la víctima individualizada.¹¹⁵ En la óptica del Derecho Ambiental, la

110. Fadeyeva v. Rusia, App. No. 55723/00 Corte Eur. D.H. en ¶ 134.

111. *Id.* ¶¶ 136-39.

112. *Id.* ¶¶ 148-50.

113. *Id.* ¶ 141.

114. *Id.* ¶ 142.

115. Richard Desgagné, *Integrating Environmental Values into the European*

compensación debe ser destinada a reparar la lesión causada al ambiente, pues esta representa un daño a la colectividad. El principio del contaminante-pagador, elemento básico del Derecho Ambiental, determina que el contaminante tiene que reparar los daños causados, sobre todo por ser difícil evaluar, financieramente, un daño ambiental. Sólo en la imposibilidad de reparar el daño ambiental, el contaminante debe indemnizar.

B. LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL PUEBLO Ogoni

Ejemplo muy promisorio fue la decisión proferida por la Comisión Africana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Ogoni v. Nigeria,¹¹⁶ en el cual la estatal petrolera de aquel país, en participación con la multinacional Shell, fueron autorizadas por el gobierno militar nigeriano — sin consulta previa a la comunidad — a explotar petróleo en las tierras del Pueblo Ogoni, causando contaminación ambiental y problemas de salud.¹¹⁷ El Consorcio explotó las reservas de petróleo existentes en las tierras Ogonis sin ninguna consideración con el ambiente, arrojando basura tóxica en los cursos de agua en violación a los estándares internacionales de protección ambiental, y vertiendo aceite en las cercanías de las poblaciones, contaminando el agua, el suelo y el aire.¹¹⁸ La polución causó serios impactos a la salud de los miembros de la comunidad, resultando en infecciones del cutis, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, aumento del riesgo de cáncer y de problemas neurológicos y reproductivos.¹¹⁹ El gobierno nigeriano además de no monitorear las operaciones, exigiendo estudio de impacto ambiental e imponer medidas de seguridad compatibles con ese tipo de explotación, cooperó para la ocurrencia de esos eventos al colocar el

Convention on Human Rights [Integrando los Valores del Medio Ambiente dentro de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos], 89 AM. J. INT'L L. 263, 283-84 (1995) (describiendo el enfoque individualista que brinda la protección internacional a los derechos humanos).

116. *Ver República Federal de Nigeria, supra* nota 87.

117. *Ver id.* ¶ 1.

118. *Id.* ¶ 2.

119. *Id.*

poder jurídico y militar del Estado a la disposición de la petrolera para reprimir el Pueblo Ogoni.¹²⁰

El gobierno nigeriano respondió a las protestas del Pueblo Ogoni utilizando de fuerza bruta y violencia masiva, incluso asesinando sus líderes.¹²¹ Las fuerzas de seguridad quemaron y destruyeron poblaciones Ogonis, bajo pretexto de desalojar y prender aquellos que apoyaban el Movimiento de Supervivencia del Pueblo Ogoni. Algunos ataques incluyeron las fuerzas policiales, el ejército, la fuerza aérea y la marina, los cuales utilizaron tanques y armas sofisticadas, mientras otros fueron conducidos por tiradores no identificados que actuaban principalmente por la noche.¹²² Además de dejar millares de personas sin techo, el gobierno nigeriano destruyó las fuentes de alimento del Pueblo Ogoni, contaminando el suelo y las aguas de los cuales dependían para cultivo y pesca, destruyendo cosechas y matando animales para impedir que volvieresen a sus tierras.¹²³ Las fuerzas armadas crearon un verdadero estado de terror y de inseguridad con el fin de impedir el retorno de las personas.¹²⁴ La polución de los suelos cultivables y de los ríos, asociada a la destrucción de las plantaciones y de los animales, provocó desnutrición y muerte por inanición de varios miembros de la comunidad.¹²⁵

Al apreciar el caso, la Comisión constató violación de los arts. 2º, 4º, 14, 16, 18.1 y 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos,¹²⁶ y determinó al Gobierno de Nigeria la ejecución de las siguientes medidas, con los objetivos de proteger el ambiente, la salud y la supervivencia del Pueblo Ogoni: a) levantar todos los ataques a las comunidades y a sus líderes por parte de las fuerzas de seguridad y permitir el libre acceso de ciudadanos y investigadores independientes al territorio Ogoni; b) conducir averiguaciones pertinentes a las violaciones de los derechos humanos arriba

120. *Id.* • 3.

121. *Id.* • 5.

122. *Id.* • 7.

123. *Id.* • 9.

124. *Id.*

125. *Id.*

126. Ver Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de las Personas, *supra* nota 40, capítulo I, art. 2 (enumerando el "derecho al disfrute de los derechos y libertades reconocidos y garantizados" por la Carta Africana sin ninguna discriminación).

mencionados y procesar los oficiales de las fuerzas de seguridad, de la compañía y agencia estatal responsables por esos hechos; c) asegurar adecuada compensación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo asistencia y reasentamiento de las víctimas de los ataques perpetrados por las fuerzas del Estado, así como la limpieza del suelo y de los ríos dañados por las operaciones de explotación de petróleo; d) asegurar la realización de evaluación de impacto ambiental y social para emprendimientos futuros de explotación de petróleo por equipo independiente del gobierno y de las petroleras; e) disponer informaciones atinentes a los riesgos al ambiente y a la salud, permitiendo el acceso a los procesos de toma de decisiones por parte de las comunidades a ser afectadas por las operaciones de explotación de petróleo.¹²⁷

Se observa en el presente caso, que la decisión fue más amplia que la anterior, pues además de compensar las víctimas fue impuesta al Estado la obligación de reparar los daños ambientales ya causados y impedir los futuros.

C. LA ACTUACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PUEBLO INDÍGENA AWAS TINGNI MAYAGNA

El ejemplo más emblemático que ilustra como los pueblos indígenas pueden actuar como sujeto de derecho internacional es el caso La Comunidad Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) v. Nicaragua,¹²⁸ juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte reconoció los derechos de propiedad sobre las tierras ocupadas tradicionalmente por los indígenas que estaban siendo amenazadas por la explotación ilegal de madera, bajo autorización del Estado.¹²⁹

127. *Id.* art. 4 (enumerando el "derecho a la vida y a la integridad de [la] persona"); *id.* también *id.* en art. 14 (enumerando el "derecho de propiedad"); *id.* en art. 16 (enumerando el "derecho a la salud física y mental"); *id.* en art. 18,1 (enumerando el "derecho a la protección de la familia"); *id.* en art. 24 (enumerando el "derecho a un medio ambiente general satisfactorio favorable a su desarrollo").

128. La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, 2001 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 79, ¶ 149 (sentencia de 6 de agosto de 2001).

129. *Id.* en ¶ 153 (señalando que el estado falló en "delimitar efectivamente y demarcar" el territorio).

La preocupación de la Comunidad Awas Tingni sobre la posesión de la tierra intensificó cuando Compañías Transnacionales comenzaron a ingresar en las tierras milenarias ocupadas por ese pueblo, con permiso del Gobierno de Nicaragua, para inventariar los recursos del bosque tropical y explotar comercialmente madera en larga escala.¹³⁰ El Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, otorgó concesión a una Multinacional para explotación de madera en un área aproximada de 43.000 hectáreas, la mayoría en tierras reivindicadas por los Awas Tingni con base en el principio de la ocupación tradicional. La Comunidad, tras agotar los recursos internos, demandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la revocación de la concesión de explotación de madera por la Multinacional y para asegurarle el derecho a la tierra.¹³¹

La Comisión sometió el caso a la Corte,¹³² que declaró que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la protección judicial (art. 25) y a la propiedad (art. 21) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó que fuera reconocidos y protegidos los derechos de la comunidad a las tierras ocupadas tradicionalmente y a los recursos naturales. La Corte decidió que el Estado de Nicaragua debería adoptar en su derecho interno, en conformidad con el art. 2º de la Convención, medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza, necesarias a la creación de mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, de acuerdo con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de esas comunidades.

Decidió también que Nicaragua debería abstenerse de interferir o permitir que terceros interfirieran, sin aquiescencia de la comunidad indígena, en el aprovechamiento de los bienes ubicados en el área habitada por ella.¹³³ La Corte impuso al Estado Nicaragüense la

130. *Ver id.* ¶ 6 (señalando que la comunidad indígena pidió "medidas preventivas" en su petición porque el estado estaba a punto de otorgarle a la compañía Sol del Caribe, S.A. derechos a la tierra).

131. *Ver id.* (señalando el inicio de los procedimientos judiciales).

132. *Ver id.* ¶ 2; bajo la alegación de violación de la "obligación de respetar los derechos" (art. 1), del deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2), del derecho de a la protección judicial (art. 25) y del derecho de propiedad (art. 21), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

133. *Id.* ¶ 153 (añadiendo que "los miembros de la comunidad Awas Tigni tienen el derecho a que el estado emprenda la delimitación, demarcación, y la titulación del territorio que le pertenece a la comunidad").

obligación de invertir, a título de reparación por daño moral, en el plazo de doce meses, la suma total de cincuenta mil dólares norte americanos en obras o actividades de interés colectivo de la Comunidad Mayagna, de común acuerdo con ella y bajo supervisión de la Comisión Interamericana.¹³⁴

A título de gastos y costas en que incurrieron los miembros de la Comunidad y sus representantes, en los procesos internos y en el proceso ante el Sistema Interamericano, la Corte decidió que el Estado pagase a los miembros de la Comunidad Mayagna treinta mil dólares norte americanos.¹³⁵ Y, por último, estipuló que el Estado prestase cuentas a la Corte Interamericana a cada seis meses de las medidas tomadas, que supervisase el cumplimiento de la sentencia, dándose por concluido el caso, solamente tras su cabal ejecución.¹³⁶

El caso establece la relación entre ambiente, degradación ambiental y abuso de derechos humanos causados por la explotación comercial de madera en territorio indígena. La decisión estableció importantísimo precedente para comunidades indígenas, las cuales sigue teniendo sus derechos sistemáticamente violados en el Continente Americano y en todo el mundo.¹³⁷

Este es el caso más destacado envolviendo la relación entre derechos humanos y medio ambiente, el cual fue defendido, utilizando normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹³⁸ Por la primera vez una Corte Internacional de Derechos Humanos reconoció, expresamente, los derechos de propiedad sobre tierras tradicionales de un pueblo indígena.¹³⁹ El caso abre una animadora perspectiva, en el sentido de una Corte de Derechos

134. *Id.* ¶ 167.

135. *Id.* ¶ 169.

136. *Ver id.* ¶ 173(8)-(9).

137. *Ver* S. James Anaya & Claudio Grossman, *The Case of Awas Tingni v. Nicaragua: A New Step in the International Law of Indigenous Peoples [El Caso de Awas Tingni v. Nicaragua: Un Nuevo Paso en la Ley Internacional de los Pueblos Indígenas]*, 19 ARIZ. J. INT'L & COMP. L. 1 (2002) (explicando que "los Awas Tingni no pretendían forjar un precedente legal internacional con implicaciones para pueblos indígenas en todo el mundo, pero eso es lo que terminaron haciendo" a través de su caso).

138. *Ver id.* en 2 (describiendo el caso y señalando que fue "la primera decisión legal por un tribunal internacional que sostuviera el derecho colectivo a la tierra y a los recursos de los pueblos indígenas después de que un estado haya fracasado").

139. *Ver id.*

Humanos impedir violaciones de derechos económicos, culturales y sociales de una forma más amplia.

Se resalta que el Caso Awas Tingni tuvo participación destacada de las ONG's. Una amplia coalición de organizaciones indígenas de Nicaragua y ONGs, incluyendo el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA) y el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), dieron soporte jurídico a la comunidad, mediante la presentación de *amicus curiae*, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en apoyo a la alegación de que Nicaragua actuó contrariamente a los derechos de la Comunidad Indígena sobre sus tierras.¹⁴⁰

La decisión de Corte Interamericana en el caso Awas Tingni es más amplia que la tomada por la Corte Europea en diversos casos (v.g. López Ostra v. España), pues realza la importancia de la protección ambiental como valor colectivo en comparación a la calidad ambiental como interés individual.¹⁴¹ La Corte Interamericana cerró el círculo de la interrelación entre el disfrute de los derechos humanos y la protección ambiental, pues en el caso el medio ambiente se confunde con las tierras de la comunidad indígena.¹⁴²

Aunque la Corte Europea reconozca la importancia de la protección ambiental, ella no integra sus aspectos colectivos, mismo porque los peticionarios buscan defender el derecho individual de víctima de degradación ambiental, visando obtener reparación sólo por daños causados a su vida familiar. La protección ambiental, en ese contexto, es limitada por la tendencia individualista del sistema de protección europeo, que resulta del abordaje individual de los derechos protegidos y de la exigencia concerniente a legitimidad para peticionar. En el Sistema Europeo, sólo la víctima posee

140. *Ver id.* en n. 19 (enumerando varios de los informes legales *amicus curiae*).

141. *Ver* Anaya & Grossman, *supra*, nota 138.

142. *Ver* Jennifer A. Amriott, *Environment, Equality, and Indigenous Peoples' Land Rights in the Inter-American Human Rights System: Mayagna (Sumo) Indigenous Community of Awas Tingni v. Nicaragua* [Ambiente, igualdad, y las derechos de tierra de la gente indígena en el sistema interamericano de los derechos humanos: Comunidad indígena de Mayagna (Sumo) de Awas Tingni v. Nicaragua], 32 ENVTL. L. R. 875, 903 (2002) (señalando que "la decisión de la Corte Inter-Americana marca un importante paso en el reconocimiento de la conexión entre los derechos indígenas a la tierra, los derechos humanos, y temas relacionados al medio ambiente").

legitimidad para peticionar a la Corte. Sin embargo el concepto de víctima potencial haya sido ablandado—hay que probar la conexión directa entre el daño ambiental y la violación del derecho protegido del solicitante. La defensa de intereses colectivos por individuos es algo aún no admitido por ese sistema.¹⁴³ La decisión de la Corte Interamericana fue innovadora porque los efectos de la sentencia han alcanzado la protección de los derechos e intereses colectivos de un pueblo a su medio ambiente, con el cual tiene vínculos ontológicos, ecológicos y evolutivos milenarios.¹⁴⁴

CONCLUSIÓN

De lo expuesto, se deduce que el papel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la protección ambiental reside básicamente en la realización de las propias normas de derechos humanos existentes en los instrumentos internacionales y en las Constituciones nacionales. El cumplimiento integral de los derechos humanos catalogados puede desempeñar papel notable en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, condición esencial al fortalecimiento del estado ecológico democrático de derecho y al respecto al debido proceso legal ambiental—factores fundamentales a la protección ambiental.

Lo mejor que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede hacer, en la etapa actual de su evolución, es fortalecer la ciudadanía, otorgando a las personas los instrumentos capaces de forzar los gobiernos a regular las interferencias en el ambiente y a cumplir de forma efectiva la aplicación de sus propias leyes ambientales con el fin de garantizar la protección ambiental y la reparación de los daños ambientales.

Bajo esa perspectiva, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dará gran contribución a la protección ambiental al asegurar la libertad de asociación para el propósito de proteger el ambiente y al fortalecer los derechos a recibir y diseminar informaciones ambientales, a acceder a los procedimientos administrativos y judiciales aptos a prevenir y reparar los daños

143. Ver Desgagné, *supra* nota 115, en 283-84 (describiendo el caso de M v. Austria para demostrar “los límites inherentes en tratar de afirmar un derecho colectivo a través de un procedimiento que está principalmente designado a proteger los derechos individuales”).

144. Ver generalmente Amiott, *supra* nota 142.

ambientales y a participar en los procesos de planificación y tomas de decisiones, garantizando la participación efectiva de los ciudadanos en la defensa del ambiente.

Concluyendo, es conveniente recordar que la protección ambiental sólo puede ser realizada plenamente con el fortalecimiento de la cultura de paz y del espíritu de solidaridad en las relaciones internacionales. En ese sentido, la universalización de la educación con enfoque humanista, holístico, democrático y participativo es de fundamental importancia en el proceso de evolución del *Homo sapiens* a *Homo sapiens frater*. Edificar una cultura de protección ambiental y de solidaridad no es fácil. Puede parecer más una utopía, pero es una necesidad impostergable. De otro modo, se puede esperar la barbarie y la eliminación de sociedades pródigas, centradas en el egoísmo, en la desconsideración de las leyes ambientales y en el súper consumismo. Más que nunca, en tiempos de globalización, el ambiente ecológicamente equilibrado se confunde con el derecho de la humanidad a un planeta con funciones y procesos ecológicos preservados, razón por la cual la protección ambiental es inseparable de la promoción de los derechos humanos.

Copyright of American University International Law Review is the property of American University International Law Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.